

La corrupción y la política de la reforma

Daniel Bell

Traducción de Rubén Gallo

La corrupción, dicen los cínicos, está presente en todas las sociedades políticas. Aún así, ésta tiene diversas manifestaciones sociales.

En las sociedades totalitarias, la corrupción se manifiesta en el uso arbitrario del poder. No existe el imperio de la ley, los decretos del dictador o del partido pasan por encima de cualquier ley. No hay instituciones o grupos rivales que proporcionen un sistema de pesos y contrapesos. Existen pocas maneras de usar el recurso de apelación contra los veredictos de los superiores.

En un sistema democrático, la corrupción es el dinero. Se tiene que elegir a los políticos, y las campañas modernas son costosas. Las empresas comerciales pueden sobornar a los funcionarios para conseguir contratos, o los mismos políticos pueden exigir dinero para otorgar trabajos.

Durante la mayor parte de los años de la postguerra, concentramos nuestra atención en el caso de las sociedades totalitarias. Presenciamos con aversión las revelaciones de la megalomanía de líderes comunistas como Ceaucescu en Rumanía, y la manera personal y arbitraria en la que él y su familia administraron su país y lo llevaron a la ruina.

Ahora, en el último año, han surgido las más extraordinarias, arrebatadas y repetidas revelaciones de corrupción en un gran número de países, con ramificaciones que están cambiando el panorama político. En Japón, el antiguo sistema de partidos se está desmoronando, y la reforma política puede no sólo producir una "nueva" generación de líderes políticos, sino ocasionar un desplazamiento de influencia electoral de la antigua base del poder en las áreas rurales y agrícolas hacia las áreas urbanas. La reforma también puede desembocar en cambios de estrategia hacia los Estados Unidos a medida que los nuevos líderes luchan para crear nuevas identidades políticas que por el momento se mantienen ocultas.

En Italia, toda la clase política ha perdido credibilidad: 2 500 personas, políticos y empresarios, están siendo investigados por crímenes. Han caído el Partido Socialista, bajo la dirección de Bettino Craxi, y el partido Demócrata Cristiano dominante, que había sido presidido por Giulio Andreotti, primer ministro siete veces y ahora acusado de colaborar con la mafia. La reforma de la estructura política está siendo planeada, y se están formando nuevas fuerzas políticas tanto de izquierda como de derecha.

No es sólo en estos dos países, que han recibido la mayor parte de la publicidad, sino en otra media docena de naciones que incluyen a Brasil y a Venezuela —donde dos presidentes han sido acusados de crímenes y forzados a abandonar su cargo— y a países como Alemania, España, e Inglaterra, en donde los problemas de corrupción monetaria han salido a la superficie. Puesto que la corrupción involucra importantes elementos sociológicos y morales, debemos explorar más allá

de la superficie periodística si queremos realizar un análisis político serio y explicar el porqué de esos acontecimientos, de las formas en que se han manifestado, y predecir su significado para la estabilidad de las sociedades. Sin estabilidad, no podemos tener expectativas racionales sobre el futuro, ni invertir a largo plazo en un país, ni asegurarnos de que las promesas serán cumplidas. En breve, lo que está en juego es la esencia de la *confianza*, ya que en ésta se apoya la voluntad de un pueblo para aceptar la legitimidad de una sociedad y obedecer sus leyes.

Este artículo se concentrará principalmente en el caso del Japón. Repasaré brevemente lo que ha sucedido en otros países, y concluiré con un análisis sobre la reforma política y algunas observaciones sobre las cuestiones sociológicas y morales fundamentales que hacen de éste un asunto tan serio para la democracia.

Brasil es el sexto país más grande del mundo, con una población de más de 150 millones de personas. En diciembre de 1992, Fernando Collor de Mello fue acusado de corrupción y arrojado de la presidencia. En todo esto hubo una ironía considerable. Collor, joven y carismático, había sido electo dos años antes por sus promesas de eliminar la corrupción y liberalizar la economía. Después se reveló que uno de sus socios empresariales había ganado millones de dólares al recibir sobornos de los empresarios a cambio de contratos gubernamentales, y que Collor había gastado dos y medio millones de dólares en jardines para su casa. Durante dos años, Collor sermonizó a los brasileños sobre la necesidad de adoptar medidas de austeridad; mientras, los salarios reales cayeron en un 50%, y la inflación alcanzó índices de 20% mensual. Cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar, y aunque se temía una intervención militar —Brasil fue gobernado por un régimen militar durante 21 años— el senado pudo ejercer los poderes procesales bajo la constitución de 1988. Aún así, los problemas asociados a los cambios económicos no han sido comprendidos, y la inversión en Brasil sigue siendo incierta.

En Venezuela, el país más rico de América Latina por su petróleo, el presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado de malversación de fondos en mayo de 1993. Venezuela había tenido un gobierno democrático durante 34 años, y durante este tiempo las reservas petroleras formaron la base para la creación de un estado de asistencia y seguridad social y lubricaron el sistema de empleos por designación. Entonces vino el colapso petrolero de 1989, y los salarios reales de los venezolanos cayeron a casi dos tercios de los índices de la década anterior. Pérez perdió popularidad al levantar los subsidios e implantar duras reformas económicas. Aún así, no fue la corrupción lo que más indignó al pueblo, sino el hecho de que Pérez se estuviera enriqueciendo personalmente mientras pedía sacrificios económicos a la nación. La lección

política primordial de estos acontecimientos es que las ganancias y sacrificios económicos deben ser compartidos con mayor igualdad.

El único presidente latinoamericano que mantiene el equilibrio sobre la cuerda floja de la política es Carlos Salinas de Gortari. Ha podido mantener su popularidad con el lanzamiento del programa Solidaridad, que proporciona ayuda técnica y capital a comunidades y grupos para que construyan sus propios caminos, escuelas y drenajes. La raíz del problema es que un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha mantenido el control sobre casi todas las ramas del gobierno durante 64 años, y que el ejecutivo no se responsabiliza ante el congreso por la distribución de fondos públicos. La constitución establece que el presidente sólo puede gobernar durante un periodo de seis años (que para Salinas terminará en 1994), y ya se registran maniobras para nombrar a su sucesor. El avance económico de México depende de la aprobación norteamericana del Tratado de Libre Comercio, que ahora se encuentra en juego. La estabilidad social también depende de la transición del sistema político hacia formas más abiertas y democráticas.

Los acontecimientos en América Latina reflejan las crisis de un régimen. En el caso de Japón, el problema puede radicar en la esencia del sistema político.

Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la ocupación norteamericana en Japón inició una serie de reformas de gran escala que incluyeron reformas agrarias y la creación de un fuerte movimiento sindicalista. El primer gobierno de gabinete fue el del Partido Socialista, ya que la ocupación quiso que los nuevos líderes fueran personas sin ninguna relación con gobiernos anteriores.

La política norteamericana cambió radicalmente con la guerra de Corea. La importancia pasó de la reforma a la estabilidad y al fortalecimiento de instituciones ya existentes. Discretamente se permitió el resurgimiento del *Zaibatsu* —los cuatro antiguos grupos financieros de mayor importancia que habían sido casi disueltos— junto con otras fuertes empresas. Se desarrolló un nuevo "triple", que había de mantener el poder durante 40 años: la comunidad empresarial, la burocracia y el Partido Demócrata Liberal (una fusión de dos grupos). El cemento de esta unión lo dio la Guerra Fría, por la necesidad norteamericana de mantener el apoyo japonés en Asia, así como por la dependencia japonesa de los Estados Unidos para su protección y seguridad. De esta manera prosperó la economía japonesa.

Aún así, la estructura política resultó poco ágil, ya que favorecía principalmente a los distritos rurales y no tomó en cuenta los grandes desplazamientos demográficos hacia áreas urbanas. Algunos distritos rurales tienen tres veces la representación de áreas urbanas equiparables. El PDL instituyó impuestos bajos para los agricultores, subsidios para mantener altos los precios alimenticios, y prohibió la entrada del arroz extranjero al mercado japonés. Además, la mayoría de los distritos electorales no eligen a un representante único, como en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Cada distrito selecciona de tres a cinco representantes, fomentando una gran competencia entre los candidatos. Puesto que hay pocas diferencias políticas entre ellos, un político necesita de la ayuda de una facción fuerte y dinero para comprar votos si quiere resultar electo.

El Primer Ministro Miyazawa no pudo satisfacer la exigencia de reforma política, y esto debilitó al sistema cuando un número considerable de miembros del PDL abandonaron el partido para votar contra el gobierno.

Detrás de todas estas maniobras se vislumbran dos consideraciones que pueden resultar decisivas para el futuro de la política japonesa. Una es de carácter sociológico, la otra de índole política. La primera tiene que ver con el dinero. La segunda comprende alianzas y estrategias.

La corrupción en torno al dinero tiene una larga historia en Japón. A mediados de los años 70, el Primer Ministro Tanaka fue acusado de recibir sobornos de la Lockheed Corporation por la venta de sus aviones en Japón. Diez años más tarde, el escándalo de Recruit —una nueva y arriesgada compañía de telecomunicaciones y bienes raíces— manchó las carreras de los integrantes de la facción del ex Primer Ministro Noboru Takeshita, la del Primer Ministro Nakasone y la del propio Miyazawa, quien entonces renunció a su cargo como ministro de finanzas.

Ahora el escándalo de corrupción gira alrededor de Ohin Kanemaru, el "hombre de negro" de la política japonesa que se mantenía entre bastidores mientras manipulaba el juego. Al menos para el observador externo, esta situación difiere considerablemente del pasado. En primer lugar, esto ha ido ocurriendo con un trasfondo de incertidumbre, atrasos económicos y pérdida de empleos. Todo lo cual ha contribuido a reforzar la idea de que la sociedad japonesa puede no estar funcionando con tanta eficacia como se creía. En segundo lugar tenemos el alto grado de corrupción. Cuando se abrió la caja de caudales de Kanemaru, se encontraron 50 millones de dólares, algunos de ellos en lingotes de oro. Poco tiempo atrás, Kanemaru había pagado una pequeña multa por evasión fiscal.

La tercera revelación causó el mayor impacto, al menos para el observador externo. Se trató del descubrimiento de las relaciones de Kanemaru con la *yakuza* —la mafia japonesa— y de los favores que se concedieron mutuamente. (Cuando Kanemaru recibió una contribución de 4 millones de dólares de un empresario involucrado con la mafia, el efectivo —50 000 billetes de 10 000 yenes— tuvo que ponerse en un carro de supermercado para llevarse hasta su oficina).

Desde hace más de diez años, la imagen que Japón ha presentado al mundo ha sido la de una sociedad limpia por excelencia, libre de violencia y de crimen. Es cierto que existe poca violencia personal en Japón, y que las calles son relativamente seguras. En gran parte porque el Japón es una sociedad bajo estricta supervisión policiaca. En el pasado se habían presentado incidentes en que la *yakuza* (cuya base de operaciones está formada por los bares, la prostitución, y el "comercio bajo el agua") fue utilizada por empresas comerciales para intimidar a sus accionistas durante juntas anuales. Se creía que éstos eran acontecimientos del pasado, que habían comenzado a desaparecer a medida que las compañías japonesas crecieron y se transformaron en firmas corporativas bien establecidas con grandes bases de acciones de interés variable en el mercado. Las revelaciones sobre el comportamiento de Kanemaru demostraron hasta qué grado había sido utilizada la *yakuza* para silenciar a grupos políticos (en este caso, grupos de derecha que habían protestado contra la facción de Takeshita), y cómo los bancos habían facilitado

fuerzas créditos a bandas de la *yakuza* para ayudar a financiar sus operaciones en bienes raíces y en otros negocios.

Más intangiblemente, estos hechos revelan lo vacío del apego de muchos políticos a los valores japoneses —el honor, la lealtad, la sobriedad, el deber. Muchos de estos políticos son "nuevos hombres" con pocas raíces en la antigua estructura social japonesa, y su comportamiento ha resultado alarmante para muchísimos japoneses, especialmente cuando está en juego la identidad japonesa dentro del nuevo orden mundial.

En este momento es difícil precisar la manera en que el sistema político japonés será reformado, ya que las nuevas alianzas y coaliciones, y la nueva redistribución de distritos, están en proceso de negociación. Los observadores ven un profundo cinismo, ya que muchos de los hombres más jóvenes —como Hata y Ozawa— provienen de las viejas facciones. No sé si este cinismo tiene o no justificación. Pero sí me atrevería a suponer que los nuevos políticos tendrán que presentar una "nueva" cara si quieren recuperar la credibilidad.

Existe una consideración política de mayor importancia en juego —el destino futuro del Japón. Internamente, la "economía de burbuja" se ha reventado, y ahora se deben formar nuevas políticas macroeconómicas. Internacionalmente, Japón tiene que redefinir su posición con respecto a los Estados Unidos. Mantener una vieja "alianza" significaría necesariamente doblegarse económicamente a las demandas norteamericanas en cuanto a los mercados japoneses para productos norteamericanos y a la reducción del superávit comercial por medio de la limitación de exportaciones (como sucede ahora con la presión sobre el yen, que ha incrementado los precios de los productos japoneses en el extranjero). Asumir un curso más "independiente" significaría renunciar a los mercados europeos y norteamericanos para buscar un equilibrio dentro de las nuevas estrategias de las potencias emergentes de la Cuenca del Pacífico. Estas cuestiones sobresalen al evaluar el nuevo orden —o desorden— político que está surgiendo con la disolución de los conflictos entre las potencias, las viejas ideologías y la hegemonía norteamericana del siglo xx.

Detrás de todo esto se vislumbra un mayor problema moral relacionado con el destino de la democracia y del capitalismo —del capitalismo como sistema de retribuciones económicas, y de la democracia como sistema de lealtad civil y confianza.

En los Estados Unidos y en Japón, la década de los ochenta fue un periodo de "avaricia". Mucho de esto se simboliza en la película *Wall Street*, en la que Michael Douglas actúa en el papel del financiero Gekko. Gekko pronuncia ante una junta de accionistas un discurso apasionado que exalta el ethos de la avaricia. (El personaje de la película está basado en parte en la carrera de Ivan Boesky, declarado culpable de crímenes financieros y encarcelado). El ethos aprobaba ganar dinero por medio de manipulaciones, de inflar el valor de los bienes, de adquirir fuertes préstamos respaldados por títulos sin valor. En la vida real, todo esto contribuyó al increíble colapso de las asociaciones de ahorros y préstamos norteamericanos, y al gran número de quiebras bancarias que hasta ahora han costado a los contribuyentes norteamericanos 100 000 millones de dólares. Los hijos de esta generación están pagándolo ahora con un nivel de vida que ha bajado y sigue bajando.

En Japón, Yasushi Mieno —el administrador del Banco del Japón que reventó la burbuja del inflado auge japonés—

ha dicho (citado en una entrevista publicada en el *Wall Street Journal*. Junio 15 de 1993) que la expansión desmesurada de los últimos años de la década de los ochenta "afectó la estabilidad e integridad de la sociedad japonesa al debilitar el ethos de la labor y la noción de trabajar con el sudor de la frente". El auge, dijo, precipitó "el decaimiento moral" y propició "desigualdad en la distribución de la riqueza".

Si el capitalismo aún debe enfrentarse al ethos de la "avaricia", la democracia debe enfrentarse al problema de la confianza. Casi todas las sociedades están perdiendo la confianza en el orden político y en los políticos. Este hecho ha servido con frecuencia para alimentar a las fuerzas reaccionarias que tratan de canalizar el resentimiento popular para convertirlo en fundamentalismo religioso o en un nacionalismo ascendente. La corrupción del dinero emerge como símbolo de la disolución de la confianza en la democracia. La reedificación de la confianza puede comenzar sólo cuando los políticos y la clase política demuestran rectitud y autoridad moral en su comportamiento. Esta es la gran tarea que aguarda a las sociedades democráticas en los próximos años. □



Germaine Richier: *Pastor de Landes*, 1951